

C.A. de Santiago

Santiago, veintiuno de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En estos autos RIT O-35-2024 del Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de esta ciudad, RUC N° 1901163870, por sentencia de dieciséis de abril del año en curso, dictada por las juezes señoras Ingrid Droguett Torres, Colomba Guerrero Rosen y María José Araya Álvarez, se absolvió a Miguel Alejandro Puchi García, a José Luis Santibáñez Lucero y a Patricio Fernando Gormaz Torres, de la acusación formulada en su contra como autores del delito de apremios ilegítimos, previsto y sancionado en el artículo 150 D del Código Penal, en perjuicio de Sergio Antonio González Ocampo, cometido en Peñalolén el 21 de octubre de 2019.

En contra de esta sentencia, el Ministerio Público (en adelante también “MP”) dedujo recurso de nulidad por la causal de la letra e) del artículo 374, con relación a la letra c) del artículo 342 y al artículo 297, todas disposiciones del Código Procesal Penal.

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (en adelante también “INDH”), querellante en la causa, impugnó la sentencia mediante la interposición del mismo recurso y por idéntica causal y, en subsidio, por la causal de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal.

El día once de este mes esta Corte escuchó a los apoderados de los recurrentes y de los tres acusados y fijó una audiencia para el día de hoy para la lectura de esta sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los hechos de la acusación del MP son los siguientes: “El día 21 de octubre de 2019, alrededor de las 23:00 horas, un contingente militar de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército de Chile, efectuó labores de patrullaje por diversas calles de la comuna de Peñalolén. Dicho contingente estaba conformado por una patrulla comando al mando del Capitán del Ejército el imputado Miguel Alejandro Puchi García, y dos patrullas de camiones del Ejército, la primera de ellas a cargo de la Teniente del Ejército Kamila Alejandra Navarrete Robles, e integrada por 14 personas, entre ellas el Sargento 2° del Ejército José Iván Sepúlveda Alvear, y los imputados Sargento 2° del Ejército José Luis Santibáñez Lucero, y cabo dragoneante del Ejército Patricio Fernando Gormaz Torres; y la segunda



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HFXCXXDBXX

patrulla a cargo del Teniente del Ejército Ernesto Ibarra Pulgar, integrado por 13 personas, entre ellas el Sargento 2° Francisco Javier Santander Nanjari. En ese contexto el contingente militar se desplazó por Avenida Las Parcelas en dirección al oriente, y al llegar a la intersección con calle Quebrada de Umallani, personal tripulante del vehículo antes indicado advirtió la presencia de la víctima Sergio Antonio González Ocampo, quien al percatarse que el personal militar descendía de uno de los camiones portando fusiles y escopetas, por temor decidió salir corriendo del lugar, huyendo solo, desarmado, sin agredir al personal militar. En dicho momento, el acusado y Sargento 2° del Ejército José Luis Santibáñez Lucero, quien aún se encontraba arriba del camión ya señalado, en la parte posterior del mismo, se percató de esta situación, y como primera medida ante la huida de la víctima, **infringiendo los protocolos establecidos para el uso de armamento no letal**, apuntó con su escopeta antidisturbios de manera directa hacia el cuerpo de la víctima, a corta distancia, percutando así un disparo directo hacia ésta, motivo por el cual Sergio Antonio González Ocampo recibió un total de 06 perdigones en distintas partes del cuerpo, particularmente en su pierna derecha, codo izquierdo, pierna izquierda, muslo y rodilla izquierda. Todo esto ocurrió en presencia del Capitán de Ejército Miguel Puchi García, funcionario de rango más alto y que se encontraba a cargo del contingente militar, quien teniendo la facultad, autoridad y posición para impedir o al menos hacer cesar esta situación, nada hizo, sin arbitrar las medidas necesarias para resguardar la integridad física y psíquica de la víctima. Acto seguido, la víctima ya herida, siguió corriendo por calle Quebrada de Umallani, momento en el que a la orden de la Teniente Kamila Alejandra Navarrete Robles, tres cabos dragoneantes, entre ellos el imputado Patricio Fernando Gormaz Torres, iniciaron la persecución de la víctima, quien dadas sus lesiones perdió el equilibrio, cayendo al piso en la intersección de la calle Umallani con Pasaje Zapiga, para luego levantarse y seguir corriendo con dificultad por el Pasaje Zapiga. Al llegar frente a la numeración de Pasaje Zapiga N° 9125, la víctima volvió a caer, logrando el imputado Patricio Fernando Gormaz Torres darle alcance, y aún antes de que la víctima lograra ponerse totalmente de pie, el imputado y cabo dragoneante del Ejército Patricio Fernando Gormaz Torres, **lo embistió golpeándolo violentamente en sus costillas**, derribándolo. Luego la



víctima fue levantada del piso, y colocada en sus manos amarras plásticas, siendo trasladado hasta la intersección de Avenida Las Parcelas con calle Quebrada Umallani, lugar donde se encontraban las patrullas militares, recibiendo en dicho trayecto un fuerte golpe de mano abierta en su cabeza, además de recibir reiterados insultos por parte del imputado y cabo dragoneante del Ejército Patricio Fernando Gormaz Torres. Posteriormente, ya en la intersección recién citada, la Teniente Kamila Navarrete, hizo entrega de la víctima al imputado y Capitán del Ejército Miguel Puchi García, haciéndole presente la forma en que había ocurrido la detención y la fuerza que se empleó en esta. Sin embargo, el Capitán de Ejército Miguel Puchi García, habiendo tomado conocimiento de esto y estando al mando de dicho contingente militar, obvió las evidentes lesiones de la víctima, tampoco ordenó que fuera revisado y en lugar de trasladarlo a un Centro de Salud para que recibiera la debida atención médica, decidió, a pesar de que la víctima tenía su ropa ensangrentada, se quejaba de dolor y presentaba evidentes lesiones en su rostro, subirlo a la parte posterior de la segunda patrulla militar, con sus manos amarradas atrás de su cuerpo y boca abajo, iniciando el contingente militar desplazamientos por alrededor de algunos minutos, por diversas calles de la comuna de Peñalolén, para finalmente trasladarlo hasta la 43° Comisaría de Peñalolén, ubicada en Avenida Consistorial 2060 de esta comuna, entregándolo en calidad de detenido y sin dar cuenta del grave estado de salud en que se encontraba, lugar donde el personal de salud policial, al advertir tal situación, lo trasladó hacia un centro de salud para recibir atención médica. Respecto de todo este procedimiento, el acusado y Capitán de Ejército Miguel Puchi García, no dio cuenta a su mando en el Ejército de Chile, no dejó constancia del mismo ni informó del uso de armas de fuego por personal a su cargo. De esta manera, el acusado y Capitán de Ejército Miguel Puchi García no deja constancia, ni registro alguno, de los hechos ocurridos bajo su responsabilidad. A raíz de estos hechos, la víctima Sergio González resultó con contusión de tórax, fractura del segmento lateral del noveno arco costal izquierdo con desplazamiento y del décimo arco costal izquierdo sin desplazamiento, tabique nasal con desviación levoconvexa y espolón óseo; policontuso; neumotórax ipsilateral de escasa cuantía; enfisema en la pared del hemitórax izquierdo; extremidades inferiores con herida por perdigones en muslo, pierna y rodilla



izquierda, heridas múltiples. Lesiones explicables por la acción de objetos contundentes y proyectiles de armas de fuego, de pronóstico legal grave, que sanan entre 45 y 60 días con igual tiempo de incapacidad, dejando secuelas estéticas notoriamente visibles no deformantes en áreas expuestas habitualmente, en vías de curación, existiendo concordancia entre la historia de síntomas físicos e incapacidades agudas crónicas y las alegaciones de abuso, según protocolo de Estambul N° 3572-2019, realizado a la víctima, por la perito Patricia Negretti Castro, de fecha 28 de Noviembre de 2019”.

SEGUNDO: Que, por su parte, el INDH presentó acusación en los siguientes términos: “El día 21 de octubre de 2019, alrededor de las 23:00 horas, un contingente militar de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército de Chile, efectuó labores de patrullaje por diversas calles de la comuna de Peñalolén. Dicho contingente estaba conformado por una patrulla comando al mando del Capitán del Ejército el imputado Miguel Alejandro Puchi García, y dos patrullas de camiones del Ejército, la primera de ellas a cargo de la Teniente del Ejército Kamila Alejandra Navarrete Robles, e integrada por 14 personas, entre ellas el Sargento 2° del Ejército José Iván Sepúlveda Alvear, y los imputados Sargento 2° del Ejército José Luis Santibáñez Lucero, y cabo dragoneante del Ejército Patricio Fernando Gormaz Torres; y la segunda patrulla a cargo del Teniente del Ejército Ernesto Ibarra Pulgar, integrado por 13 personas, entre ellas el Sargento 2° Francisco Javier Santander Nanjari. En ese contexto el contingente militar se desplazó por Avenida Las Parcelas en dirección al oriente, y al llegar a la intersección con calle Quebrada de Umallani, personal tripulante del vehículo antes indicado advirtió la presencia de la víctima Sergio Antonio González Ocampo, quien al percatarse que el personal militar descendía de uno de los camiones portando fusiles y escopetas, por temor decidió salir corriendo del lugar, huyendo solo, desarmado, sin agredir al personal militar. En dicho momento, el acusado y Sargento 2° del Ejército José Luis Santibáñez Lucero, quien aún se encontraba arriba del camión ya señalado, en la parte posterior del mismo, se percató de esta situación, y como primera medida ante la huida de la víctima, **infringiendo los protocolos establecidos para el uso de armamento no letal**, apuntó con su escopeta antidisturbios de manera directa hacia el cuerpo de la víctima, a corta distancia, percutando así un disparo directo hacia ésta, motivo por el cual Sergio Antonio González



Ocampo recibió un total de 06 perdigones en distintas partes del cuerpo, particularmente en su pierna derecha, codo izquierdo, pierna izquierda, muslo y rodilla izquierda. Todo esto ocurrió en presencia del Capitán de Ejército Miguel Puchi García, funcionario de rango más alto y que se encontraba a cargo del contingente militar, quien teniendo la facultad, autoridad y posición para impedir o al menos hacer cesar esta situación, nada hizo, sin arbitrar las medidas necesarias para resguardar la integridad física y psíquica de la víctima. Acto seguido, la víctima ya herida, siguió corriendo por calle Quebrada de Umallani, momento en el que a la orden de la Teniente Kamila Alejandra Navarrete Robles, tres cabos dragoneantes, entre ellos el imputado Patricio Fernando Gormaz Torres, iniciaron la persecución de la víctima, quien dadas sus lesiones perdió el equilibrio, cayendo al piso en la intersección de la calle Umallani con Pasaje Zapiga, para luego levantarse y seguir corriendo con dificultad por el Pasaje Zapiga. Al llegar frente a la numeración de Pasaje Zapiga N° 9125, la víctima volvió a caer, logrando el imputado Patricio Fernando Gormaz Torres darle alcance, y aún antes de que la víctima lograra ponerse totalmente de pie, el imputado y cabo dragoneante del Ejército Patricio Fernando Gormaz Torres, **lo embistió golpeándolo violentamente en sus costillas, derribándolo.** Luego la víctima fue levantada del piso, y colocada en sus manos amarras plásticas, siendo trasladado hasta la intersección de Avenida Las Parcelas con calle Quebrada Umallani, lugar donde se encontraban las patrullas militares, recibiendo en dicho trayecto un fuerte golpe de mano abierta en su cabeza, además de recibir reiterados insultos por parte del imputado y cabo dragoneante del Ejército Patricio Fernando Gormaz Torres. Posteriormente, ya en la intersección recién citada, la Teniente Kamila Navarrete, hizo entrega de la víctima al imputado y Capitán del Ejército Miguel Puchi García, haciéndole presente la forma en que había ocurrido la detención y la fuerza que se empleara en esta. Sin embargo, el Capitán de Ejército Miguel Puchi García, habiendo tomado conocimiento de esto y estando al mando de dicho contingente militar, obvió las evidentes lesiones de la víctima, tampoco ordenó que fuera revisado y en lugar de trasladarlo a un Centro de Salud para que recibiera la debida atención médica, decidió, a pesar de que la víctima tenía su ropa ensangrentada, se quejaba de dolor y presentaba evidentes lesiones en su rostro, subirlo a la parte posterior de la segunda



patrulla militar, con sus manos amarradas atrás de su cuerpo y boca abajo, iniciando el contingente militar desplazamientos por alrededor de algunos minutos, por diversas calles de la comuna de Peñalolén, para finalmente trasladarlo hasta la 43° Comisaría de Peñalolén, ubicada en Avenida Consistorial 2060 de esta comuna, entregándolo en calidad de detenido y sin dar cuenta del grave estado de salud en que se encontraba, lugar donde el personal policial, al advertir tal situación, lo trasladó hacia un centro de salud para recibir atención médica. Respecto de todo este procedimiento, el acusado y Capitán de Ejército Miguel Puchi García, no dio cuenta a su mando en el Ejército de Chile, no dejó constancia del mismo ni informó del uso de armas de fuego por personal a su cargo. De esta manera, el acusado y Capitán de Ejército Miguel Puchi García no deja constancia, ni registro alguno, de los hechos ocurridos bajo su responsabilidad. A raíz de estos hechos, la víctima Sergio González resultó con contusión de tórax, fractura del segmento lateral del noveno arco costal izquierdo con desplazamiento y del décimo arco costal izquierdo sin desplazamiento, tabique nasal con desviación levoconvexa y espolón óseo; policontuso; neumotórax ipsilateral de escasa cuantía; enfisema en la pared del hemitórax izquierdo; extremidades inferiores con herida por perdigones en muslo, pierna y rodilla izquierda, heridas múltiples. Lesiones explicables por la acción de objetos contundentes y proyectiles de armas de fuego, de pronóstico legal grave, que sanan entre 45 y 60 días con igual tiempo de incapacidad, dejando secuelas estéticas notoriamente visibles no deformantes en áreas expuestas habitualmente, en vías de curación, existiendo concordancia entre la historia de síntomas físicos e incapacidades agudas crónicas y las alegaciones de abuso, según protocolo de Estambul N° 3572-2019, realizado a la víctima, por la perito Patricia Negretti Castro, de fecha 28 de Noviembre de 2019. Asimismo, la víctima, producto de los hechos ocurridos ha presentado sintomatología propia de estrés postraumático, presentando cuadros de angustia, ansiedad, ánimo cambiante, sintiendo desmotivación, tristeza y preocupación, además de vulnerabilidad, amenaza y desconfianza. Los hechos provocaron un quiebre significativo en su ciclo vital, viéndose afectado en el ejercicio pleno de su autonomía y sobre todo en el ámbito ocupacional”.



TERCERO: Que tanto el MP como el INDH fundaron sus respectivos recursos en la causal de la letra e) del artículo 374, con relación a la letra c) del artículo 342 y con el artículo 297, disposiciones todas del Código Procesal Penal. Y se basan, ambas impugnaciones, en que el tribunal *a quo*, en el motivo noveno de su fallo, confunde la acreditación del hecho, esto es, la conducta desplegada por el acusado señor Santibáñez, con la normativa que en su opinión debiera ser aplicada. Y ello por cuanto el referido razonamiento expone que no se alcanzó la convicción de haberse infringido algún protocolo por parte del referido acusado. En cuanto al acusado señor Puchi, el tribunal refirió que “no fue posible adquirir convicción de que las acciones de la patrulla comandada por el acusado Puchi, hayan estado desprovistas de la gradualidad que las reglas del uso de la fuerza exigían y expuso el perito Muñoz, máxime cuando en el caso se trata de un arma de carácter no letal”, con lo que vuelve a confundir los hechos con el derecho aplicable. En lo que hace al acusado señor Gormaz, se asevera que no resultó probado que este le diera una patada en las costillas al señor González Ocampo, en circunstancias que lo imputado a este acusado es que embistió y golpeó violentamente en sus costillas al señor González, derribándolo, de modo que resulta ilógico absolver a alguien por no haberse demostrado un hecho que no le fuera imputado en las acusaciones.

Se añade que en el motivo décimo, en cuanto a Gormaz, que no se logró demostrar cuál de los militares que participaron en la detención de González Ocampo fue quien le propinó una patada, y se refiere a la prueba rendida para tal efecto, valoración respecto de la cual los recurrentes disienten, pues de la grabación realizada por una testigo “se ve a dos personas que pasan corriendo, atrás pasa un tercero, luego se escucha un disparo y se ve a un militar, a un segundo militar y más atrás a un tercer militar; y antes de que llegue el segundo militar se escucha decir algo seguido de un ‘concha de tu madre’ y un quejido de la víctima”, lo que es corroborado por la testigo señora Camila Ramírez Pino, quien filmó las imágenes narradas, lo que también afirmó Joshua Martínez Santibáñez, pareja de la testigo Ramírez. Agrega que los dichos de la víctima se condicen “en su núcleo” con lo declarado por el acusado Gormaz, por lo tanto “las contradicciones que se presentan con lo que declaró la perito doctora Negretti, en relación con el desvío de su tabique nasal y el espolón



óseo que le fue hallado en los exámenes posteriores que se le hicieron, no merman su credibilidad, siendo más bien una cuestión accesorio, ya que el resto de las lesiones constatadas son consistentes con la conducta desplegada por Gormaz Torres”. Se añade que el propio Gormaz afirmó haberle hecho un tacle para detenerlo.

En el mismo considerando, en cuanto a la imputación a Santibáñez, la sentencia da por acreditado el hecho que este disparó su escopeta antidisturbios cargada con balines de goma y que la víctima fue herida en sus piernas con perdigones, resolviendo el tribunal que no se determinaron las reglas del uso de la fuerza, requisito del tipo penal. Sin embargo, la norma aplicable era aquella vigente a la fecha de los hechos, a saber, “El empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura, será castigado...Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo”. La modificación a esta norma, la del artículo 150 D del Código Penal, consiste en que las aludidas conductas deben ser realizadas “en incumplimiento de los reglamentos respectivos”, lo que, de acuerdo al tribunal *a quo*, debe aplicarse en forma retroactiva y que, por lo mismo, se debe demostrar el reglamento infringido, razonamiento que resulta imposible de cumplir pues no puede pedirse al MP que pruebe algo que no estaba vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos, de modo que este razonamiento es “antojadizo”, a lo que debe agregarse que, de acuerdo a lo resuelto en su oportunidad por el Tribunal Constitucional, la modificación en cuestión no habría agregado una exigencia típica sino una modalidad comisiva.

Por otra parte, en relación a la falta de gradualidad en el uso de la fuerza, el tribunal oral en lo penal estableció que no hay prueba que permita sostener que las acciones de la patrulla militar, el día y hora de los hechos, hayan estado desprovistas de la gradualidad que las reglas del uso de la fuerza exigían. Para tal efecto existe un video en que se ve correr a una persona y gritos de “ahí va ese huevón” y luego disparos. El tribunal tuvo en cuenta los dichos de los otros militares que estaban en el lugar, que



afirmaron que le dieron a la víctima la orden de detenerse, pero que este continuó en su huida y que por ello se le disparó. Luego, ha debido el tribunal valorar de mejor manera la prueba objetiva, como lo es la filmación, frente a los testimonios de los compañeros de armas de los acusados y de los propios dichos de los acusados. Tampoco hay explicación acerca de la razón para no valorar positivamente el parte policial de N° 3587 de 22 de octubre de 2019, que da cuenta del hecho que el sargento segundo de ejército, José Luis Santibáñez Lucero, manifestó que realizaban un patrullaje en Peñalolén y vieron a unos sujetos que habrían efectuado disparos, de modo que tomó una escopeta antidisturbios y disparó, cayendo uno de estos individuos.

El tribunal de la instancia también ha afirmado que no es posible concluir que el disparo de perdigones haya sido efectuado al cuerpo de la víctima, en circunstancias que es de público conocimiento que, en este tipo de armas, la dispersión de los perdigones es importante.

En cuanto a Puchi García, se le acusó de no haber impedido que Santibáñez disparara y el tribunal consigna que, si este último no incurrió en apremios ilegítimos, mal podría condenarse al primero, a lo que agrega aun cuando la conducta de Santibáñez fuera constitutiva de apremios ilegítimos, no existe prueba suficiente para concluir que Puchi pudiera impedir el disparo, desconociendo así el carácter jerarquizado del ejército, en la que existe la responsabilidad del mando. Y lo mismo sucede con la conducta atribuida a Gormaz: como no se acreditó, Puchi no puede responder.

Se hace presente, finalmente, que los argumentos de la sentencia del tribunal oral en lo penal “son débiles y circulares, descartando prueba de cargo, sin argumentos sólidos”.

CUARTO: Que debe precisarse que si bien los recursos del MP y del INDH, en lo que se refiere a la causal en comento, no difieren sustancialmente, en el deducido por el INDH se hace notar, además, una contradicción pues, en el motivo noveno de la sentencia impugnada, se habría concluido la falta de determinación de las reglas del uso de la fuerza y, a la vez, que la prueba fue insuficiente para demostrar la falta de gradualidad en la conducta de Santibáñez.

QUINTO: Que el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: “Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de



los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e)". Por su parte, el artículo 342 del mismo Código, en su letra c) señala que: "Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297". A su turno, el artículo 297 del citado Código Procesal Penal expresa que "Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados".

"El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo".

"La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegue la sentencia".

SEXTO: Que, luego, los jueces con competencia en lo penal deben: a) ponderar toda la prueba aportada al proceso, incluso aquella que se desestime, indicando las razones que tuvo para ello; y b) realizar dicha valoración con libertad, pero sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Respecto de esta última obligación, y como se ha sostenido en otras ocasiones, el Código Procesal Penal no otorga a los jueces del fondo una libertad absoluta en aquello de ponderar la prueba aportada al proceso y así establecer el delito, la participación o alguna circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, pues en tal labor deben respetar la racionalidad, la coherencia y la razonabilidad que los conduce a resolver en un determinado sentido. La octava acepción de la palabra "lógica" dada en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es la que más se adecua a lo que el legislador pretende en el citado artículo 297: "Modo de pensar y de actuar sensato, de sentido común". Couture resume el significado de las reglas de



la sana crítica señalando que son “las reglas del correcto entendimiento humano”.

SÉPTIMO: Que, desde luego, las sentenciadoras del fondo han valorado toda la prueba rendida en el proceso y, en la labor de justipreciación de dicha evidencia, ninguna falta al artículo 297 del Código Procesal Penal han cometido; antes, al contrario, han valorado la prueba ateniéndose a la lógica más estricta, sin vulnerar aquellas reglas fijadas por el conocimiento empírico ni los datos que la ciencia se ha encargado de dar por verdaderos.

OCTAVO: Que, en efecto, el tribunal *a quo* ninguna confusión tiene entre los hechos de la acusación y la normativa aplicable al caso concreto pues, como se lee de ambas acusaciones, la del MP y la del INDH, reproducidas en los considerandos primero y segundo de esta sentencia, respectivamente, se les imputó a los acusados la infracción de los protocolos establecidos para el uso de la fuerza, de modo que menester ha sido demostrar la existencia de tales procedimientos. Bien dice el tribunal oral en lo penal que no está discutido que Santibáñez disparó la escopeta antidisturbios cargada con balines de goma y que en la época de los hechos no existía otra regla para el uso de la fuerza que un acto administrativo que no goza de la publicidad que tiene la ley ni de la presunción de conocimiento de la misma, de modo que resulta irrelevante si la norma legal, al tiempo de los hechos, exigía o no, la infracción de los reglamentos *ad-hoc*, pues ha sido el ente persecutor y el querellante las entidades que han incluido tales procedimientos, protocolos o reglas en la descripción fáctica de la acusación, razonando el tribunal del mérito en la forma indicada, sin que se advierta en ello ninguna transgresión a la citada norma del artículo 297 del Código Procesal Penal.

Por lo demás, y siempre en lo que toca al imputado Santibáñez, el tribunal razona del siguiente modo en su extenso considerando décimo: “... aun cuando las pruebas de los acusadores y de las defensas, proporcionaron elementos que permiten distinguir algunos de los principios inspiradores de tales reglas, como legalidad, necesidad y proporcionalidad, por las circunstancias en la que se produjeron los hechos, de noche, con restricción de circulación, bajo un patrullaje no exento de eventos disruptivos del orden público, no permite adquirir convicción conforme el estándar legal de que las acciones de la patrulla hayan estado desprovistas de la gradualidad que las



regla del uso de la fuerza exigían y expuso el perito Muñoz, máxime cuando en el caso se trata de un arma de carácter no letal. En efecto, del contexto temporoespacial y circunstancial en el que Santibáñez hizo uso de su armamento no letal, dieron cuenta entre otros, Joshua Martínez Santibáñez, toda vez que indicó que había barricadas en la avenida y que se sentía olor a humo en el ambiente y el propio afectado. También, Daniel Ignacio González Ocampo, hermano de la víctima declaró que el día en que ocurrieron los hechos su hermano Sergio González, venía llegando de Los Andes. Llamaron a unos amigos de su hermano y amigos de él, entre ellos, Javier, Matías, Ángelo y Álvaro y organizaron un cacerolazo del cual participaron niños y vecinos. Se trataba de algo familiar. Sergio sacó un parlante y un micrófono. Él sabía que en la subcomisaria había habido balaceras, robos, saqueos. En Las Parcelas habían saqueado un supermercado, pero eso había ocurrido cuando su hermano aún no llegaba de Los Andes. A las 20:00 horas comenzó el cacerolazo y se prolongó hasta las 21:00 horas o hasta las 22:00 horas en que llegaron unos 'flaites' que pusieron música, llevaron alcohol e hicieron fogatas, por lo que, junto a su hermano prefirieron alejarse de todo eso que ocurría en Quebrada de Umallani con Las Parcelas, por eso, ellos prefirieron alejarse de ahí con su hermano y amigos hacia una plaza. Luego, los 'flaites' salieron corriendo porque por Las Parcelas subieron 2 camionetas de Carabineros de civil. Los 'flaites' corrieron por Quebrada de Camarones al sur, mientras que su hermano se acercó hasta Las Parcelas, mientras que él lo siguió. Sergio cruzó Las Parcelas en diagonal hacia el sur, donde está el colegio Juan Bautista, una iglesia mormona y antes, había una paquetería. Fue ahí en que vieron que venían subiendo por las Parcelas los militares en sus vehículos. Los militares arrasaron con las fogatas que había en Quebrada de Suca y en calle 19. Detalló que desde la calle 15 a la 20 estaba lleno de fogatas. Su hermano estaba por el frente, fue el único que cruzó Las Parcelas, él y 2 amigos quedaron al otro lado y cuando su hermano se podía devolver, ya era demasiado tarde, le dijeron a Sergio que corriera. Agregó que él corrió hacia Lago Gris junto a los amigos y mientras corría escuchó los primeros disparos, luego miró y vio a su hermano por pasaje Zapiga, vio que su hermano perdió el equilibrio y se cayó y observó a un militar que iba hacia su hermano. Él siguió corriendo y perdió de vista a Sergio. En el mismo sentido, el afectado, Sergio González Ocampo, dijo que



el 21 de octubre de 2019, alrededor de las 16: 00 horas sacó un parlante de la casa e hizo un llamado a la población para hacer un cacerolazo en Las Parcelas con Quebrada de Umallani, que culminó como a las 20:00 horas. Fue a guardar el parlante y volvió hasta el lugar, donde advirtió que había personas juntando cosas para hacer barricadas, por lo que él y unos amigos se fueron a una placita que queda en Quebrada de Umallani. Llegaron unos 'flaites', que luego se fueron porque por Las Parcelas de poniente a oriente subieron 2 camionetas negras, polarizadas que, según decían, se trataba de policías de civil. Él salió a Las Parcelas para ver qué pasaba, cruzó la calle hacia la calle Del Jardín. Sabía que más abajo por Las Parcelas había un supermercado que había sido saqueado, pero él estaba en Las Parcelas y había cruzado para ver mejor hacia la calle Del Jardín. Vio que venían los militares y se adentró por calle Del Jardín. Hacia el interior de esa calle hay un campamento, donde hay tráficos de drogas por lo que no quiso correr hacia el interior donde estaba esa población. Los militares doblaron por Las Parcelas a calle Del Jardín y ahí él decidió correr hacia su domicilio en Lago Gris N° 9191, es decir, corrió ahora hacia el otro lado de la calle Del Jardín, explicando que hacia el norte de Las Parcelas la calle se llama Del Jardín y hacia el sur, Quebrada de Umallani. No imaginaba la velocidad de los vehículos militares. Se bajaron los militares de los transportes, con armamento en mano y a los 3 segundos le estaban disparando balines de goma, de frente, de costado y por la parte trasera del cuerpo. Detalló que, cuando vio doblar a los militares Del jardín le dijeron: 'párate ahí' y escuchó disparos que provenían de frente, de al lado y de atrás, que no hubo una advertencia para que se detuviera o disparaban, sino que, le dijeron párate ahí y 'paa', mientras que él corría. Cabe consignar que posteriormente en su declaración dijo que primero le dispararon y luego le ordenaron detenerse".

Y concluye que "el análisis de estos testimonios, por su coherencia y consistencia, permite contextualizar el evento en horas de la noche, a eso de las 23:00 horas, vigente el toque de queda, el contingente militar transitaba por Av. Las Parcelas encontrándose con barricadas a lo largo de la calle. En efecto el propio hermano de la víctima sostuvo que había barricadas en la calle 15 a la 20, en la calle 19 y un poco más abajo en la intersección de Las Parcelas con Quebrada de Suca. También reconocieron que se formó una barricada en la intersección de Quebrada de Umallani. El sector no había



estado libre de saqueos y como dijeron los funcionarios militares se oían ruidos de disparos y veían fogonazos. En esas circunstancias, notoriamente adversas, fue que observaron a la víctima salir corriendo, desde Las Parcelas, a metros de donde había barricadas, y sujetos que se estaban dispersando con ocasión de la subida previa de un contingente policial. Luego, la víctima que infringiendo el toque de queda fue seguida por el equipo militar. La víctima corrió hacia el sur por calle Del Jardín y luego se devolvió al norte corriendo en dirección a las patrullas. No se efectuaron peritajes que determinaren la luminosidad del sector, empero era de noche en que sabemos reina la oscuridad, por lo que es esperable y razonable que se observaran solo siluetas de sujetos. **En tales condiciones tan poco favorables, ver a un sujeto que surge corriendo desde sectores cercanos a las barricadas, que no obedece las órdenes de detención y que, en segundos e inopinadamente se acerca raudo a una oficial mujer, desatendiendo los efectos disuasivos de las armas de fuego, pudo naturalmente alertar a Santibáñez para ocupar su arma no letal a fin de disuadir a González para que detuviera la marcha contra Navarrete**”.

“Por lo demás, no obstante, lo fugaz del episodio **no resulta claro que no se haya dado cumplimiento a los requisitos de gradualidad para uso de armamento**, pues no consta que no haya habido advertencias verbales y con armas de sonido, previo al disparo de armamento no letal. Si bien, Sergio González fue confuso al respecto, pues dijo en la primera parte de su declaración que le ordenaron detenerse y le dispararon, luego dio a entender que recibió la orden simultáneamente a los disparos y luego continuó su declaración diciendo que primero le dispararon y después le dijeron que se detuviera, lo cierto es que, pese a la confusión, el afectado no desconoció que se le instruyó detenerse y no lo hizo. Luego, los funcionarios militares fueron contestes en señalar que constatando que el afectado huía se le efectuaron advertencias verbales para que se detuviera haciendo caso omiso de lo que se le ordenaba. Posteriormente, se detonó el armamento a fuego y después, Santibáñez detonó la escopeta con munición antidisturbios. La víctima señaló que recibió disparos provenientes de todas partes de la caravana, por delante, por el costado y por detrás del cuerpo, sin embargo, no hubo evidencias de ello, tanto por el tipo de lesión que presentó como por



la ausencia de peritajes en el lugar de los hechos que permitieran concluirlo. No obstante, ello, tal afirmación hace plausible que los otros disparos que dijo que hubo correspondieran a armamento a fogueo. Al efecto, era sustancial contar con los testigos civiles que presenciaron el hecho, con ello nos referimos al equipo de Megavisión, pues si bien, los acusadores incorporaron un video, obtenido del acusado Puchi y singularizado en el auto de apertura con el N.U.E 256766, lo cierto, es que, al reproducirse el material, si bien, las imágenes dieron cuenta de una nota de prensa del canal de Megavisión, las mismas aparecen editadas, observándose los trayectos que el día de los hechos indicaron los patrulleros que habían realizado, luego se observó al acusado acercándose corriendo por el costado izquierdo de la imagen, siendo apuntado por Puchi y luego, apareció una entrevista concedida por el acusado Puchi en un lugar distinto al de ocurrencia de los hechos. Al no concurrir a estrado los testigos presenciales y advirtiendo que la filmación está editada y no figuran en ella los momentos previos en que la víctima corría hacia el sur, su paso frente al vehículo de punta de lanza, que no fue controvertido, ni luego, el momento en que cambió de rumbo, no podemos descartar, que se hayan efectuado las advertencias por parte del personal militar, Ibarra, máxime que durante la reproducción se escucharon los sonidos de disparos de alerta y se observó que el afectado pese a ello continuó huyendo. En consecuencia, no se acreditó que, la primera medida ante la huida de la víctima fue el disparo de armamento no letal a que aludieron los persecutores, evadiendo un deber de advertencia y de gradualidad en el uso de la fuerza”.

“Huelga consignar, que como coincidieron la víctima y los acusados, los hechos ocurrieron en cuestión de segundos, en que la víctima modificó su rumbo y se dispuso, corriendo en dirección a la patrulla”.

“Un tercer orden de ideas esbozadas al comunicar el veredicto, guarda relación con que **tampoco fue posible concluir con el nivel de convicción a que se hizo referencia, que el disparo con el arma no letal, antidisturbios propinado por Santibáñez, se haya efectuado directo al cuerpo del afectado, tanto porque no existe una prueba de trayectoria como porque en el caso, el afectado se encontraba en movimiento, lo que aumenta la posibilidad de que el proyectil haya efectivamente**



rebotado en su persona, tesis que fue sostenida por la defensa, toda vez, que no fue discutido que corría huyendo del lugar.

NOVENO: Que, en consecuencia, el tribunal *a quo*, sin vulnerar el artículo 297 del Código Procesal Penal y, en realidad, ajustándose estrictamente a su contenido, señaló lo que sigue:

1.- Que no se probó que Santibáñez haya disparado la escopeta antidisturbios “con infracción de reglamentos”. Sobre este particular sólo cabe señalar que fueron los acusadores los que, en sus respectivas descripciones fácticas, indicaron que el actuar de Santibáñez fue con infracción de los protocolos idóneos para disparar tal escopeta, de modo que ninguna relevancia tiene para estos efectos el determinar cuál norma legal es aplicable al caso concreto pues, sea la actual —que exige el “incumplimiento de los reglamentos respectivos”— o sea la antigua, en todo caso se ha debido demostrar la existencia de los protocolos a que aluden las acusaciones.

2.- Que aun cuando se pudiera concluir que tales reglamentos existían y que eran conocidos por los acusados, no se advierte que se hayan podido vulnerar, atendidas las difíciles circunstancias de insurrección y desorden, con saqueos y vandalismo en el lugar de los hechos y que los hechos ocurrieron en segundos, acercándose el señor González a una oficial de sexo femenino de apellido Navarrete, lo que hace —dice acertadamente el tribunal oral en lo penal— que el hecho que Santibáñez haya disparado su arma, en tales condiciones, no parece vulnerar ninguna regla. Y no es cierto que esta conclusión sea contradictoria con la primera, pues lo que ha dicho el tribunal es que, de las circunstancias descritas, no es posible concluir que el empleado público (Santibáñez) haya podido “abusar de su cargo”, como lo exigía y lo exige actualmente, el artículo 150 D del Código Penal. Y se hace cargo la sentencia del video del que hacen caudal los recurrentes: está editado y no es concluyente.

3.- Que, enseguida, si nada de lo anterior fuera suficiente, el tribunal concluye que no hay evidencia que el disparo de Santibáñez haya sido dado directamente al cuerpo de la víctima, de modo que, con o sin reglamentos, tampoco hay un “abuso de su cargo”.

DÉCIMO: Que en lo que toca a Gormaz, las acusaciones refieren que este, respecto de la víctima, señor González, “lo embistió golpeándolo



violentamente en sus costillas, derribándolo”. El tribunal señaló que “embestir” denota cualquier golpe de alta intensidad, sin que se probara que Gormaz le haya dado una patada en las costillas a González. Es cierto que lo del puntapié no fue descrito en las acusaciones, pero la sentencia hace ver que la testigo, la doctora Negretti, relató que la víctima le dijo que un militar le había dado una patada. Lo único probado es que el propio señor Gormaz dijo que le había hecho un tacle a la víctima, lo que se corresponde con el verbo “embestir”, palabra que significa, según el DRAE, “ir con ímpetu sobre alguien o sobre algo”. Luego, si son los propios acusadores los que hablan de embestir y Gormaz reconoce que le hizo un “tacle”, parece una maniobra que en ningún caso puede ser considerada como un “apremio ilegítimo” en los términos del artículo 150 D del Código Penal, sino una conducta racional y proporcionada, empleada para detener a una persona que huye. Y si las lesiones sufridas por la víctima —que, por cierto, antes de su detención se había caído huyendo—, se deben a una patada en las costillas, como él mismo se lo declaró a la aludida doctora, razón lleva el fallo al sostener que no hay evidencia de quien haya podido propinarle tal puntapié.

UNDÉCIMO: Que en lo que toca al acusado Puchi García, a este se lo acusa por la omisión señalada en la norma del artículo 150 D del Código Penal. Parece racional y lógico concluir, al igual como lo hace el fallo impugnado, que, si no es posible imputar apremios ilegítimos a sus subordinados Santibáñez y Gormaz, pues mal puede ser objeto de reproche penal el jefe de la patrulla. Pero, es más, añaden las sentenciadoras del fondo que, aún en la hipótesis que Santibáñez o Gormaz o Santibáñez y Gormaz fueran autores de apremios ilegítimos, evidentemente el capitán de ejército, señor Puchi, si los hechos ocurrieron en segundos, en un ambiente de insurrección, vandalismo y saqueos por parte de una muchedumbre, nunca estuvo este acusado en posición de impedir tales conductas, debiendo recordarse que el tipo penal, en lo que a Puchi respecta, es la segunda parte del inciso primero del artículo 150 D del Código Penal, a saber: “Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impida o no haga cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello y estando en posición para hacerlo”. En el supuesto que los otros dos



acusados desplegaron la conducta descrita en la primera parte del inciso primero del artículo 150 D del Código Penal, ¿cómo pudo el capitán Puchi impedir tales conductas? Pues no pudo, nunca estuvo en posición de hacerlo. Y tan así es que el propio MP señala en su recurso que en el ejército existe “responsabilidad del mando”, lo que también sostiene el INDH en su propio recurso, y resulta que en materia penal sólo se responde como autor, cómplice o encubridor, en los términos de los artículos 14, 15, 16 y 17 del Código Penal, y jamás por una “responsabilidad del mando”, que podrá dar origen a reproches de otra índole, como administrativa o civil, pero nunca penal. Lleva razón la sentencia recurrida, entonces, cuando estima que Puchi nunca estuvo en condiciones de impedir el disparo que hizo Santibáñez y, en lo que hace a la conducta de Gormaz, este hecho ocurrió a tres cuadras de donde estaba Puchi. Luego, la lógica, la racionalidad, que ha sido la que ha gobernado el razonamiento de las jueces del tribunal oral en lo penal, lleva a concluir: a) si ni Santibáñez ni Gormaz son autores del delito de apremios ilegítimos, mal podría Puchi ser autor de la omisión que prevé la parte final del inciso primero del artículo 150 D del Código Penal; y b) aun cuando Santibáñez o Gormaz o Santibáñez y Gormaz hubieran cometido los ilícitos por los cuales se les acusó, nunca estuvo el capitán Puchi en posición de impedir tales conductas, tanto por la rapidez y las circunstancias de lo sucedido con relación a Santibáñez, cuanto porque lo acontecido con Gormaz ocurrió a tres cuadras del lugar donde estaba Puchi.

DUODÉCIMO. Que, entonces, el tribunal *a quo* ha analizado todas las pruebas aportadas y las ha analizado lógica y racionalmente, ateniéndose, precisamente, a las máximas del conocimiento empírico, de modo que, en realidad, es al revés: de haber condenado a uno o más de los acusados, en tal caso sí que el tribunal de la instancia hubiera cometido una grave falta al artículo 297 del Código Penal. Por lo anterior, los recursos, en cuanto se fundan en la causal de la letra e) del artículo 374, con relación a la letra c) del artículo 342 y con el artículo 297 del Código Procesal Penal, deben desestimarse.

DECIMOTERCERO: Que el INDH dedujo una causal subsidiaria, la de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, esto es, errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, la que vincula con el artículo 150 D del Código Penal, en su nueva



redacción, por cuanto el tribunal de la instancia sostuvo, malamente, en su concepto, que el nuevo texto de la norma estableció mayores exigencias típicas para que se configure el delito de apremios ilegítimos, a saber, el incumplimiento de los reglamentos respectivos sobre el uso de la fuerza, requisito que no se habría podido demostrar en la especie. Sin embargo — afirma el INDH—, ello constituye un yerro jurídico por tres razones: a) porque el nuevo artículo 150 D del citado texto legal no contempla nuevas exigencias típicas al realizar un reenvío a reglamentos para configurar el tipo penal, toda vez que lo esencial de la conducta es la prohibición de aplicar apremios; b) porque se pasa por alto la conjunción disyuntiva “o” que contiene la norma entre las frases “el empleado público que, en el incumplimiento de los reglamentos respectivos actúe abusando de su cargo o que en el ejercicio de sus funciones...”, de lo que se desprende que el empleado público puede cometer el delito incumpliendo los reglamentos o en el ejercicio de sus funciones; y c) porque el razonamiento agrega una exigencia probatoria a los acusadores por la cual se ha de demostrar el incumplimiento de los reglamentos sobre el uso de la fuerza, lo que es un error pues, como se dijo, el tipo penal no establece nuevas exigencias y, además, hay una segunda forma de comisión del delito, en los términos indicados.

DECIMOCUARTO: Que baste para rechazar el recurso del INDH por esta causal el hecho que el error de derecho que se denuncia, aun de existir, no tiene ninguna influencia en lo dispositivo del fallo. En efecto, ya se ha visto que el tribunal *a quo* absolvió a Santibáñez, además de lo razonado en el fallo respecto a la nueva redacción del artículo 150 D del Código Penal, porque a) no se probó que Santibáñez hubiera disparado la escopeta antidisturbios “con infracción de reglamentos”, debiendo recordarse que fueron los dos acusadores los que, en sus respectivas descripciones fácticas, indicaron que el actuar de Santibáñez fue con infracción de los protocolos idóneos para disparar tal escopeta; b) porque aun cuando se pudiera concluir que tales reglamentos existían, no se advierte que se hayan podido vulnerar, atendidas las difíciles circunstancias de insurrección y desorden, con saqueos y vandalismo en el lugar de los hechos y que los hechos ocurrieron en segundos, acercándose el señor González a una oficial de sexo femenino de apellido Navarrete, lo que hace —dice acertadamente el tribunal oral en lo



penal— que el hecho que Santibáñez haya disparado su arma, en tales condiciones, no parece vulnerar ninguna regla; y c) porque no hay evidencia que el disparo de Santibáñez haya sido dado directamente al cuerpo de la víctima, de modo que, con o sin reglamentos, tampoco hay un “abuso de su cargo”.

En cuanto a Gormaz, lo absolvió el tribunal de la instancia porque la palabra “embestir”, empleada por las acusaciones, implica cualquier acto de fuerza y no necesariamente uno irracional o desproporcionado, habiendo este acusado reconocido que le hizo un tacle cuando Sergio González Ocampo huía y sin que se probara que Gormaz le haya dado una patada, debiendo recordarse que González le dijo a la doctora Negretti, que declaró en el proceso, que un militar le había dado un puntapié.

Y en lo que respecta a Puchi, el tribunal lo absuelve, primeramente, porque si ni Santibáñez ni Gormaz son autores de apremios ilegítimos, en los términos del artículo 150 D del Código Penal, pues es imposible que Puchi haya podido incurrir en la omisión de la parte final del inciso primero de dicha norma, además que, en todo caso, nunca estuvo en posición de impedir las actuaciones de aquellos.

DECIMOQUINTO: Que, entonces, sea o no errónea la tesis de la sentencia sobre la nueva redacción del artículo 150 D del Código Penal, ello no tiene ninguna relevancia para lo resolutivo pues la absolución se habría dado de todas formas, aplicando la norma antigua o la nueva.

DECIMOSEXTO: Que, ahondando en lo anterior, si tales fueron los hechos asentados por el tribunal oral en lo penal, el recurso, en cuanto se funda en esta causal, se estrella frontalmente contra estos presupuestos fácticos, pues aún de aplicarse a los hechos de la acusación la antigua redacción del artículo 150 D del Código Penal, lo cierto es que las jueces del fondo establecieron que nunca hubo un “apremio ilegítimo”, como se ha visto.

DECIMOSÉPTIMO: Que, finalmente, habrá que decir lo obvio, esto es, lo que razonaron correctamente las sentenciadoras del fondo, a saber: la nueva redacción del artículo 150 D del Código Penal establece una nueva exigencia típica para la comisión del ilícito que describe y, por lo mismo, resulta más favorable a los acusados. En efecto, el antiguo texto de la norma, vigente a la época de los hechos, señalaba: “El empleado público



que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo”.

Y la nueva redacción, fruto de la modificación introducida por la ley 21.560, que entró en vigor el 10 de abril de 2023, es la siguiente:

“El empleado público que, **en incumplimiento de los reglamentos respectivos actúe abusando de su cargo o que en el ejercicio de sus funciones**, aplique, ordene o consienta en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen por su gravedad a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impida o no haga cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello y estando en posición para hacerlo”.

DECIMOCTAVO: Que parece evidente que la nueva norma agregó, como exigencia de las formas de comisión —de ambas, esto es, el que abusando de su cargo aplique apremios ilegítimos o el que en el ejercicio de sus funciones aplique tales apremios—, el incumplimiento de los respectivos reglamentos, esto es, aquellos relativos al uso de la fuerza. Luego, como acertadamente lo razonó el tribunal oral en lo penal, se trata de una ley penal más favorable, de acuerdo a lo reglado en el artículo 18 del Código Penal, cuyo sentido y alcance no se encuentra limitado sólo a los casos en que se elimine la ilicitud de una determinada conducta o se reduzca su sanción. Así, como en el caso *sub judice* no se demostró la infracción de reglamentos —lo que, en todo caso, estaba contenido en las acusaciones de ambos recurrentes—, la absolución es la única vía jurídicamente correcta, además de las otras razones que el tribunal del grado tuvo para dictar su sentencia liberatoria de responsabilidad penal.

DECIMONOVENO: Que, finalmente, cabe hacer dos precisiones:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HFXCXXDBXX

1.- La juez señora Colomba Guerrero Rosen señaló que “previno” y que estuvo por condenar a los acusados. Ello no es una “prevención”, sino un voto en contra, una disidencia. Previene quien, estando de acuerdo con lo resolutivo, quiere agregar uno o más fundamentos o fundar su decisión únicamente en las reflexiones que indica o que, por el contrario, no está de acuerdo con una o más de las razones que se dieron para adoptar la decisión.

2.- Los recurrentes se refirieron a la sentencia como “el voto de mayoría”. No existe algo así como un “voto de mayoría”, existe una sentencia dictada por un tribunal colegiado, adoptada por la mayoría en la forma que se indica en las reglas procesales de los acuerdos. Lo que sí existe es el “voto de minoría”. En consecuencia, lo que los recurrentes llaman “el voto de mayoría”, es, en realidad, la sentencia.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 384 del Código Procesal Penal, **se rechazan** los recursos de nulidad deducidos por el Ministerio Público y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en contra de la sentencia de dieciséis de abril de dos mil veinticuatro, dictada por el Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que absolvió de las acusaciones formuladas en su contra a los señores Miguel Alejandro Puchi García, José Luis Santibáñez Lucero y Patricio Fernando Gormaz Torres.

Redacción del ministro señor Mera.

Regístrese y comuníquese.

N°Penal-2600-2024.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la ministra señora María Loreto Gutiérrez Alvear y por la abogada integrante señora Claudia Candiani Vidal. No firma el ministro señor Mera por encontrarse con permiso administrativo.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HFXCXXDBXX

Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Maria Loreto Gutierrez A. y Abogada Integrante Claudia Candiani V. Santiago, veintiuno de junio de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintiuno de junio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HFXCXXDBXX